

Comentarios

Doce años en El Salvador: de la guerra civil a la revolución negociada

Durante doce años he tenido el privilegio —y a veces el horror— de observar, a veces de primera mano, el curso de los acontecimientos en El Salvador. He sido privilegiada porque como “gringa”, muchos salvadoreños pertenecientes a toda la gama política del país me han dado su tiempo y a veces sus almas, para ayudarme a aprender acerca de su país. También me he sentido horrorizada porque la brutalidad con la que asesinaron a casi 80 mil personas, que, además, llevó al exilio a más de un millón de personas, nunca me la hubiera podido imaginar.

Dos semanas y media antes de llegar a El Salvador, en noviembre de 1979, hubo un golpe de Estado. Un grupo de oficiales jóvenes progresistas, en coalición con otro grupo de civiles muy progresistas, entregó al presidente y general Romero, uno de los peores violadores de los derechos humanos en el hemisferio, un boleto de ida a Guatemala y le proporcionó una escolta para que lo acompañara hasta el aeropuerto. Mis valores —el respeto de los derechos humanos y la justicia social y económica para todos— me llevaron a dar la bienvenida al golpe de Estado y a esperar que los nuevos dirigentes del gobierno, aglutinados en una junta cívico militar, tuvieran éxito. Su programa consistía en las reformas socio-económicas y políticas que El Salvador necesitaba desde hacía mucho tiempo.

La necesidad tenía sus raíces en la historia del país: (a) una historia de usurpación de las tierras, tradicionalmente poseídas por los indígenas, para

cultivar productos de exportación; y (b) la creciente concentración de la tierra cultivable en cada vez menos manos, a finales del siglo XIX y comienzos del XX.

El resultado fue que, tal como lo dijo un ex rector de una universidad salvadoreña, “los ricos aumentaron su riqueza, mientras que los pobres aumentaron su número”. En 1900, había un millón de salvadoreños aproximadamente. Matemáticamente no podía haber más de un millón de pobres. En 1979, había cinco millones de salvadoreños, de los cuales, cuatro millones vivía en situación de pobreza absoluta.

Otras raíces de esa necesidad eran la creación de un ejército y tres “cuerpos de seguridad estatal” —indudablemente, una contradicción en los términos—, cuya principal razón de ser era mantener en línea a un campesinado periódicamente rebelde; un sistema político que reforzó el exclusivo sistema económico; una oligarquía que controló la economía y el Estado hasta diciembre de 1931. Después de un golpe de Estado se dio una división del trabajo, a partir del cual el ejército asumió la responsabilidad de administrar el Estado, pero permaneciendo a las órdenes de la oligarquía. Tal como me dijo Orlando de Sola, uno de los oligarcas más recalcitrantes, en enero de 1980, “tradicionalmente, hemos comprado las armas del ejército y les pagamos para que disparen”. Finalmente, otra de las raíces de la necesidad ha sido una ideología política que, en el mejor de los casos, puede carac-

terizarse como “un liberalismo clásico llevado al extremo”.

Para la oligarquía, la élite política y económica, la única función del Estado, al estilo de Thomas Hobbes, es mantener el orden. El modelo económico del *laissez faire* predominó desde mediados del siglo XIX hasta 1980. La “reforma agraria” —o “transformación”— era una mala palabra; suficiente para calificar como “subversivo” o “comunista” a quien la pronunciara, aun cuando fuera un sacerdote católico.

No exagero. En 1970, el gobierno, en una extraña explosión de reformismo, patrocinó un congreso de reforma agraria, dando así a varios sectores de la sociedad salvadoreña la oportunidad para opinar al respecto. El sector privado denunció el congreso, calificándolo de complot comunista y abandonó el recinto. La posición de la Iglesia, en favor de la reforma, fue leída por un joven sacerdote salvadoreño, Inocencio Alas.

Pocas horas después de haber pronunciado su discurso, Alas fue secuestrado por hombres vestidos de civil, quienes lo golpearon, lo drogaron y lo dejaron desnudo en un barranco al sur de la capital. Probablemente se escapó de la muerte porque el obispo auxiliar y el vicario general de San Salvador se presentaron en el Ministerio de Defensa, se sentaron en la sala exterior y dijeron que no se moverían de ahí hasta que el P. Alas apareciera vivo. Estuvieron sentados cinco horas. Esta fue la primera confrontación entre la Iglesia y el Estado a raíz del tema de los derechos humanos en El Salvador, y no fue la última.

Así, pues, llegué a El Salvador conociendo algo de esta historia y esperando que la junta tendría éxito. Sabía que era la última oportunidad para un cambio pacífico. No tenía idea del elevado costo que tendría este fracaso. Sin embargo, hay que decir que el fracaso no se debió a la junta, sino al sistema. Es sumamente importante entender esto para comprender por qué fueron necesarios doce años y una guerra civil para conseguir lo que la junta, en buena medida, pretendía.

El nuevo gobierno estaba condenado al fracaso antes del golpe de Estado, puesto que los conspiradores militares fueron infiltrados por oficiales

derechistas, decididos a impedir que las reformas llegaran muy lejos y, si era posible, a restaurar el orden anterior. La ingenuidad política de los dirigentes del golpe contribuyó a sus dificultades. Pensaron que podrían controlar a los derechistas teniéndolos vigilados.

Pero tuvieron que luchar contra un problema institucional: la autodefinición del ejército como garante de la *patria* y lo que era más importante, la obsesión del ejército con la preservación de la institución. Los oficiales conservadores consideraron las reformas como ataques contra el Estado y su institución. Por lo tanto, a finales de diciembre, confrontado con una cúpula militar que se negaba a regresar a sus cuarteles, todo el gobierno, excepto el ministro de defensa, un general, renunció.

Todavía no he contado la parte más interesante de la historia. El extenso contexto en que todo esto ocurrió. Fue lo que más me impactó a los pocos días de haber llegado a El Salvador. Este contexto tiene dos partes, la Iglesia católica y el movimiento revolucionario.

La Iglesia católica nunca quiso ni intentó participar en política. Históricamente, la Iglesia salvadoreña estuvo aliada con la oligarquía, apoyó a los regímenes militares y era extremadamente anticomunista. Pero la Iglesia tomó en serio los resultados del Concilio Vaticano II (1962-1965) y, más importante aún, la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano, tenida en Medellín (Colombia), en 1968.

Penny Lernoux, en su obra *Cry of the People*, escribió que la Iglesia cambió de lado en Medellín, de su alianza tradicional con la riqueza y el poder pasó a una nueva alianza con los pobres y oprimidos. La expresión principal de esta nueva alianza fueron las comunidades eclesiales de base, grupos de entre 20 y 30 personas, organizadas en las parroquias, que se reúnen periódicamente para estudiar la Biblia y, en consecuencia, para reflexionar acerca de cómo asumir el destino de sus propias vidas para mejorarlas.

En las áreas urbanas tanto como en las rurales, las comunidades eclesiales de base dieron a los pobres la oportunidad para reunirse organizadamente, para escoger a sus dirigentes —la primera

vez que experimentaban en su vida la democracia participativa— y, lo más importante, para reflexionar sobre la palabra de Dios desde la propia experiencia de la vida.

Históricamente, la Iglesia había sido una institución sacramental. El sacerdote llegaba, decía misa, bautizaba niños, casaba parejas y se iba. El mensaje, implícito o explícito, era, "aceptar su condición en la tierra y esperar el premio en la otra vida". El nuevo mensaje era, "Dios es un Dios de justicia que actúa en la historia a favor de los pobres y oprimidos. La pobreza de ustedes no es voluntad de Dios... De la misma manera que Moisés y los israelitas asumieron el reto de su liberación, ustedes tienen derecho para asumir la responsabilidad de la propia liberación... Y la Iglesia tiene la obligación de acompañarlos en el proceso". Para los campesinos, a quienes nunca se les había pedido pensar y a quienes mucho menos se les había preguntado lo que pensaban, las comunidades eclesiales de base fueron, al menos, una experiencia conscientizadora.

Esta evolución dentro de la Iglesia coincidió con acontecimientos políticos que, en ese momento, pasaron desapercibidos. En 1970, el Partido Comunista Salvadoreño se dividió por la cuestión de la lucha armada. Una facción se retiró a las montañas de Chalatenango y formó la primera "organización político-militar", las FPL. Otras tres organizaciones se fundaron en los cinco años siguientes, y finalmente, en 1977, el Partido Comunista cambió de idea y creó su propia fuerza guerrillera.

Hay que tomar nota de esta calificación: "organización político-militar". Estos grupos nunca fueron un grupo de guerrilleros encerrado en las montañas. Cada uno de ellos tenía un programa político más o menos bien definido. Aunque a finales de 1979 su característica más relevante era el sectarismo, reconocían que éste debía ser superado para poder alcanzar el triunfo. En esos días, el objetivo fue el triunfo político y militar, y lo siguió siendo hasta la década de los ochenta. Pero el programa político que tenían ayuda a explicar cómo obtuvieron los acuerdos en la mesa de negociación doce años más tarde.

En 1974, un grupo de campesinos de la parro-

quia del P. José Alas, ubicada en el municipio de Suchitoto, decidió que las comunidades eclesiales de base no eran el medio más adecuado para alcanzar las metas cada vez más políticas, tal como la adquisición de tierras. De esta forma, en abril, acompañados por Alas y varios sindicatos y gremios de estudiantes y maestros, se reunieron en la Basílica del Sagrado Corazón en San Salvador y fundaron la primera de las cinco organizaciones de masas, el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU).

Cuando llegué a San Salvador, estas organizaciones tenían manifestaciones casi a diario, demandando reforma agraria, empleo, el cese de la creciente represión y otras reformas socio-económicas.

Pocos días después de llegar, recorrí el centro de la capital y encontré una iglesia grande y moderna ocupada por una de las organizaciones de masas. Una semana antes, una manifestación organizada por ellos fue atacada a balazos por la Guardia Nacional, dejando 21 muertos. Veintiún cruces blancas adornaban el techo, encima de la entrada de la iglesia, la cual estaba cubierta con mantas enormes que proclamaban el motivo de la ocupación. Una de ellas anunciaba una misa para el siguiente domingo en la tarde.

Fui con ansiedad. La iglesia, donde cabían por lo menos dos mil personas, estaba repleta. En su homilía, el sacerdote atacó al ejército por sus abusos, al gobierno por su incapacidad para controlar a los cuerpos de seguridad, criticó a Estados Unidos por apoyar al régimen, defendió el derecho del pueblo a organizarse y concluyó asegurando el triunfo popular. Ahí estaban: la Iglesia y la revolución. Obviamente, ninguno de los izquierdistas que ahí estaba tenía problema con la religión. El "opio del pueblo" ya no existe, pensé.

El sacerdote, Rogelio Poncele, es belga. En ese entonces era párroco de un barrio de trabajadores en San Salvador. Meses más tarde, después de que su vida fue repetidamente amenazada y de que la Guardia Nacional puso uno de sus tanques en frente de su casa, salió para las montañas de Morazán, en el noreste del país, donde continuó su trabajo pastoral entre los campesinos y los guerri-

llos de la región.

Dos meses después, me encontré en medio de la manifestación más grande de la historia salvadoreña. Las cinco organizaciones de masas se unieron en lo que sería un largo y arduo camino hacia la unidad. Pusieron 200 mil personas en las calles de San Salvador. Como veterana de varias de las manifestaciones más grandes contra la guerra en Estados Unidos, a principios de la década de los setenta, sentí una profunda admiración ante la organización, la paciencia y la disciplina de este pueblo. La manifestación fue pacífica, hasta que fue atacada a balazos por militares y civiles, desde los techos de catorce edificios públicos y privados del centro de la capital. Hubo 49 muertos y centenares de heridos. La neutralidad que observé cuidadosamente durante diez semanas fue enterrada junto con sus cadáveres.

Salí de El Salvador en marzo, justamente, pocos días antes de que el arzobispo Oscar Romero fuera asesinado mientras decía misa. Su muerte puso fin a la época de la lucha de las masas. La represión aumentó. Aparecieron cadáveres a lo largo de las carreteras y la gente desapareció en cantidad creciente. Sencillamente, era demasiado peligroso salir a la calle, sobre todo si se era joven.

Cuando salí, tal como escribí dos años más tarde, "estaba completamente convencida de que habría una revolución. La pregunta no era 'si iba a ocurrir', sino 'cuándo sucedería'". Esta convicción no obedecía a una preferencia, sino que era una conclusión obligada después de cinco meses de investigación y observación. Creí que la intransigencia de la oligarquía y del ejército sería vencida por la organización, la disciplina y la voluntad férrea del movimiento revolucionario. Lo que no tomé en cuenta fue la decisión del gobierno de Reagan para impedir un triunfo revolucionario a toda costa.

Mientras tanto, el movimiento revolucionario estaba pasando a otra etapa. El período de transición entre marzo de 1980 y enero de 1981 llevó a la primera gran ofensiva de la guerra. Retrospectivamente, fue una ofensiva ridícula e ineficaz. El recién formado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que incluía a las cin-

co organizaciones político-militares, tenía diez veces más gente que armas, y eso que no tenía tanta gente. El ejército no estaba en una situación mejor. En las palabras del Dr. Miguel Saénz, uno de los dirigentes más altos y experimentados del FMLN, "si ellos hubieran sido competentes, nos hubieran aniquilado".

El FMLN no perdió el tiempo superándose y volvió en julio con una ofensiva tan efectiva que llevó a Francia y México a hacer una declaración conjunta, afirmando que el FMLN constituía "una fuerza política legítima", la cual debía ser tomada en cuenta en cualquier esfuerzo para resolver los problemas del país. En esta ofensiva, el FMLN por primera vez hizo prisioneros de guerra, los cuales fueron entregados formalmente a la Cruz Roja Internacional. Posteriormente, el FMLN mantuvo esta práctica durante toda la guerra.

El intercambio de cables entre la embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado, que fue hecho público a raíz de la ley sobre la libertad de información, así como las historias orales de la guerra, hechas con todos los altos oficiales militares salvadoreños y estadounidenses que estuvieron en el país por el Colegio de Guerra de Estados Unidos, entre 1981 y 1987, revelan que, entre finales de 1981 y 1984, el ejército estuvo en grave peligro de perder la guerra. Tanto los embajadores de Estados Unidos como los asesores del grupo militar se quejaron continuamente de la incompetencia de un ejército de nueve a cinco, que no salía a combatir.

¿Qué cambió todo esto? En una palabra: la aviación. Estados Unidos apuntaló la Fuerza Aérea Salvadoreña, entregó armas y municiones sin ningún límite y la mandó a destruir o dispersar a la población civil de la cual el FMLN dependía para alojarse, alimentarse, vestirse y conseguir información. Esta política de guerra aérea virtualmente irrestricta produjo la mayoría de los refugiados y de los desplazados internos. Por su parte, el FMLN fue forzado a cambiar su estrategia de grandes concentraciones de hasta mil combatientes por otra de unidades pequeñas y autosuficientes, de entre doce y quince guerrilleros.

Esto también significó que el FMLN empezó a



expandirse en áreas nuevas. De esta manera, si en 1981 operó en cinco áreas principales de concentración en seis departamentos, en 1988, el FMLN operaba en los catorce departamentos del país.

La política de Estados Unidos para El Salvador se resumió en la expresión "conflicto de baja intensidad" o "guerras pequeñas". En otras palabras, fue la última encarnación de una estrategia contrainsurgente usada en Grecia, Filipinas y Viet Nam. En los tres países fracasó como estrategia. También fracasó en El Salvador, tal como el asesor actual del Grupo Militar, coronel Mark Hamilton, lo admitió ante los comandantes del FMLN en Nueva York, a comienzos de enero. Mientras tanto, lo que para Estados Unidos fue "baja intensidad" o "guerra pequeña", para los salvadoreños fue alta intensidad y una guerra muy grande.

Pero la contrainsurgencia era sólo una parte del plan maestro. La otra parte eran las elecciones, que deberían dotar a El Salvador de un gobierno civil y "democrático", con capacidad para implementar las reformas necesarias, quitando así al FMLN su razón de ser. De esta manera, entre 1982 y 1991 ha habido seis elecciones. Se escribió una nueva constitución. Se eligieron diputados para la nueva asamblea legislativa. La banda presidencial pasó de un civil a otro por primera vez desde 1931. El problema fue que Estados Unidos confundió la forma con el contenido.

Una democracia operativa tiene ciertos atributos: la libertad de expresión, para los medios de comunicación y para la organización de partidos políticos; libertad para establecer grupos de toda clase; la ausencia de terrorismo estatal y la subor-

dinación del ejército al gobierno civil. En la década de los ochenta, con raras excepciones, ninguna de estas condiciones se dio en El Salvador.

Pero dos cosas interesantes sucedieron en el camino hacia las elecciones. Una fue el surgimiento de un partido político de ultraderecha, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), cuyos sombríos orígenes y vinculaciones directas con los escuadrones de la muerte está bien documentados. El otro suceso fue un producto inesperado y, ciertamente, no deseado (por la oligarquía, el ejército y Estados Unidos) del proceso electoral: la apertura del espacio político que había sido cerrado por la represión a comienzos de la década de los ochenta. Numerosas y nuevas organizaciones populares así como los sindicatos existentes se aprovecharon de la oportunidad para comenzar a exigir mejores salarios y condiciones de trabajo, reformas económicas y paz.

El primer presidente civil de El Salvador en 53 años, José Napoleón Duarte, fue elegido en 1984 a partir de una plataforma de paz y reformas económicas. El día de las elecciones, conversé con personas en el campo que apoyaban al FMLN, pero que votaron por Duarte debido a sus promesas.

Sin embargo, cuatro años más tarde, sin haber cumplido ninguna de las dos promesas que hizo y presidiendo el gobierno más corrupto de la historia de El Salvador, el partido Demócrata Cristiano de Duarte fue derrotado contundentemente por los areneros de extrema derecha en las elecciones de diputados y, un año después, fue derrotado de nuevo en las elecciones presidenciales que llevaron a Alfredo Cristiani, un arenero moderado, a casa presidencial. Cristiani también prometió buscar la paz.

Las dos primeras rondas de conversaciones entre el gobierno y el FMLN, sin embargo, no llevaron a ningún lado; mientras tanto, las violaciones de los derechos humanos comenzaron a aumentar una vez más y el gobierno, junto con Estados Unidos, actuaron como si se hubiesen creído su propia propaganda, es decir, que el FMLN estaba terminado como fuerza militar y que lo único negociable era su rendición.

Para el FMLN, la gota que colmó el vaso fue

la bomba que estalló a medio día en la federación sindical más grande del país (FENASTRAS), en el centro de San Salvador, a finales de octubre de 1989. Dos semanas más tarde, el FMLN lanzó la ofensiva más grande de la guerra, llevándola a la capital. Mil personas murieron en su mayor parte víctimas a causa del bombardeo aéreo de los barrios populares, desde los cuales el FMLN lanzó su ataque. No obstante, las colonias de la clase alta no fueron bombardeadas cuando la guerrilla se atrincheró en ellas y se aprovisionó en sus bien abastecidas despensas.

La ofensiva también produjo una de las tragedias más grandes de la guerra: el asesinato, por parte del ejército, de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y la hija de ésta, en el recinto de la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por la Compañía de Jesús. El colosal fracaso de la política de Estados Unidos para El Salvador está ejemplificado en este asesinato, si es que se puede hablar en estos términos. Los jesuitas y sus colaboradoras fueron asesinados por el batallón "de reacción inmediata" Atlacatl, entrenado y equipado por Estados Unidos. Este suceso, más que cualquier otro desde el asesinato de Mons. Romero y de las cuatro religiosas estadounidenses, en diciembre de 1980, puso en marcha a la opinión pública en contra de la política de Estados Unidos y, finalmente, obligó al gobierno de Bush a cambiar de política.

También obligó al gobierno de Cristiani a volver a la mesa de negociación. A los veinte meses de haberse reanudado las conversaciones, en abril de 1990, después de tres acuerdos interinos y cinco minutos antes del comienzo de 1992, el gobierno de El Salvador y el FMLN firmaron el acuerdo final de paz. El 16 de enero, en la ciudad de México, los dos lados se sentaron frente a frente y ante el mundo para firmar el documento formal.

En noviembre pasado, tomando un café en San Salvador con el corresponsal del Los Angeles Times, éste me describió los acuerdos de septiembre como "la rendición" del FMLN. En su discurso, en México, el nuevo secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali, calificó los acuerdos como "una revolución negociada". ¿Quién tiene razón?

En primer lugar, el FMLN consiguió una de sus demandas claves previa a la negociación: la mediación de Naciones Unidas. Más tarde, gestionó y consiguió el apoyo de España, México, Colombia y Venezuela, que integraron una instancia conocida como el "Grupo de amigos". Las presiones que ejercieron sobre el presidente Cristiani junto con las de Estados Unidos fueron críticas en septiembre y diciembre. De hecho, quizás la ironía más grande es que, después de gastar más de cuatro mil millones de dólares en la derrota militar del FMLN, la presión del gobierno de Bush hizo posible un acuerdo final, cinco minutos antes de año nuevo.

El domingo 29 de diciembre, el gobierno de Bush envió a Nueva York a seis altos funcionarios, incluyendo el subsecretario de asuntos interamericanos, Bernard Aronson; los embajadores William Walker (El Salvador) y Thomas Pickering (ONU); y al jefe del Grupo Militar de Estados Unidos en El Salvador, Mark Hamilton, quienes se reunieron en privado con el presidente Cristiani y el Ministro de la Defensa René Emilio Ponce. El mensaje que entregaron fue escueto y directo: no habría más ayuda militar y la continuación de la ayuda económica dependería de la finalización de los acuerdos y del respeto de los derechos humanos. Unas sesenta horas después, el acuerdo final se firmó.

Sin embargo, el acuerdo final fue alcanzado por etapas. El primer acuerdo importante se firmó en San José (Costa Rica), en agosto de 1990. Ambas partes solicitaron a Naciones Unidas una misión de observadores para supervisar el cese del fuego e investigar las violaciones de los derechos humanos. La misión, conocida como ONUSAL, inició sus labores en julio de 1991.

Los acuerdos en materia de derechos humanos incluyen la Comisión de la Verdad, la cual debe investigar todas las violaciones de los derechos humanos más graves: las masacres, el asesinato de Mons. Romero, los autores intelectuales del asesinato de los jesuitas, etc.

También hay una Comisión *ad hoc*, compuesta por tres salvadoreños nombrados por Naciones Unidas, que revisará el expediente y el historial de cada oficial de alta del ejército. Los oficiales que

no llenen los requisitos mínimos, especialmente en derechos humanos, serán dados de baja.

En segundo lugar, el ejército debe disolver todos los batallones de reacción inmediata durante los nueve meses del período de transición. En los próximos dos años, el ejército debe reducir su tamaño a la mitad.

Políticamente, es aún más significativo que el ejército ya no será el garante del orden constitucional. A partir de ahora sólo tiene la responsabilidad de proteger el territorio. En palabras de un colega de la Universidad Centroamericana, "el FMLN ha puesto en jaque al ejército".

En tercer lugar, los tres cuerpos de seguridad serán disueltos y reemplazados por una policía civil controlada por el gobierno civil. Cierta porcentage aún no especificado de la nueva fuerza estará compuesto por ex combatientes del FMLN.

En cuarto lugar, el FMLN ha logrado garantizar la tenencia de la tierra en las zonas bajo su control.

En quinto lugar, las negociaciones han logrado legitimizar las docenas de organizaciones populares que antes eran consideradas ilegales y subversivas. Además, por primera vez, los pobres están comprometidos institucionalmente en un proceso político —en el proceso de paz. Los sindicatos están representados en el foro de concertación económica. El FMLN y Convergencia Democrática forman parte de la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ).

En sexto lugar, el FMLN logró forzar cambios radicales en el sistema judicial, algo que el plan maestro de Estados Unidos y 6 millones de dólares en ayuda no pudieron hacer. También obligó a modificar el sistema electoral, que será más abierto y democrático.

En séptimo lugar, la alta dirigencia del FMLN regresó a El Salvador el 1 de febrero como dirección de un partido político legal.

En octavo lugar, el FMLN ha forzado a la oligarquía a cambiar su manera de pensar. En enero de 1980, un vocero de la empresa privada me dijo que podría ser necesario asesinar a 100,000 personas para terminar con los problemas de El Salvador y restaurar el orden establecido anterior. Des-

pués de 80 mil muertos, dicho orden ha desaparecido para siempre.

Sin embargo, el FMLN cedió bastante. Al igual que la oligarquía, ha tenido que aceptar nuevas realidades. El primer sueño que se hizo añicos fue el de una victoria militar, seguido por la idea de una revolución socialista y la destrucción de la oligarquía.

Posteriormente, el FMLN dejó de insistir en la eliminación del ejército así como también en la incorporación de sus fuerzas en el ejército institucional. A nivel político, el FMLN ha aceptado la estructura gubernamental creada por Estados Unidos y los demócrata cristianos en 1982. La oligarquía sigue controlando la economía nacional y sigue insistiendo en que su modelo de desarrollo neoliberal no es negociable. La izquierda salvadoreña tiene que encontrar la forma para desafiar este modelo sin aparecer como un obstáculo para la reconstrucción y la recuperación económica.

Después de once años de guerra, hay que aceptar un hecho doloroso: los logros del FMLN en la mesa de negociaciones nunca hubiesen sido posibles sin la lucha armada. Ni la oligarquía ni el ejército estaban dispuestos a transformarse a sí mismos ni a transformar el sistema que parieron, criaron y defendieron con un altísimo costo social.

En 1982, en la conclusión de mi libro, *Revolución en El Salvador: orígenes y evolución*, escribí: "No puede haber una solución duradera y viable en El Salvador sin la participación de las organizaciones revolucionarias. La única interrogante es cuánta sangre habrá de ser derramada antes de que el gobierno de Estados Unidos acepte ese hecho fundamental". La respuesta ya la sabemos ahora, once años y 80 mil muertos.

Los acuerdos de Nueva York transformarán la sociedad salvadoreña de una forma tal que los poderosos nunca se imaginaron. Estos cambios no ocurrirán de la noche a la mañana, y tampoco se darán sin pagar un precio. Pero el FMLN ha logrado cambiar los términos del debate, el proceso político y, en alguna medida, el sistema político de El Salvador, lo cual, en realidad, es una revolución.

T. S. Montgomery